



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

Mar del Plata, 6 de mayo de 2026.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el marco de este incidente **FMP 63/2015/TO1/24** caratulado "**RIVERO, Nancy Noemí y otros s/ incidente de extinción de la acción**" y;

CONSIDERANDO:

I.

Que se presenta el Dr. Esteban Daniel Semachowicz, abogado defensor de Nancy Noemí Rivero, Ricardo Marcelo Teramo, Alan Teramo Rivero y Beatriz Viviana Rivero solicitando se dicte sobreseimiento de sus asistidos toda vez que: "*(...) la sociedad de hecho Nancy Rivero-Ricardo Teramo CUIT 30-71476391-8 que diera lugar a las presuntas evasiones imputadas, se acogió al régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social, y aduaneras establecido por la Ley 27.743. Es de destacar que dicho plan ha sido aceptado por el ARCA toda vez que no existe impedimento alguno para el acogimiento, dado que la contribuyente no encuadra dentro de las exclusiones previstas por el artículo 4° de la ley N° 27.743 (...)*".

Para fundar su petición, señaló que la ley 27.743 de "Medidas Fiscales Paliativas y



#39664397#497053343#20260506094444738

Relevantes" (B.O. 08 de Julio de 2024), en su Título I establece un "Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social" en el que se incluyeron aquellas obligaciones tributarias y previsionales, vencidas al 31 de marzo del 2024. Paralelamente, se estableció una condonación de intereses, multas y demás sanciones y se estipuló que la cancelación de la deuda produciría la extinción de la acción penal.

Sostuvo además que, los efectos de este mecanismo de extinción de la acción penal resultan aplicables para el autor, los partícipes e instigadores, e incluye los hechos enmarcados bajo el supuesto del artículo 15 inciso c) de la Ley 27430, tal como, expresamente se aclaró en el Decreto 608/2024.

Asimismo, el defensor acompañó la documentación de ingreso al plan de pagos de la sociedad de hecho "Nancy Rivero-Ricardo Teramo" CUIT 30-71476391-8 en los términos de la ley 27.743 a través de un plan de 3 cuotas que, conforme argumenta la defensa, se encuentra cancelado en su totalidad.

Finalmente, formuló reserva de casación y del caso federal (Ley 48).

II.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

Que oportunamente se corrió traslado a la querella (ARCA) para que dictamine en primer término, la cual solicitó una serie de medidas para descartar concurrencia de eventuales causales de exclusión sobre los imputados de los beneficios de la ley 27.473.

En este marco, recibida toda la documental, la parte querellante solicitó que: "*(...) de acuerdo a la modificación en la condición objetiva de punibilidad mediante la Ley 27.799, este Organismo Fiscal no formula oposición al requerimiento elevado de extinción de la acción penal respecto a la evasión simple del Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2014 por la suma de \$ 1.979.321,15. Siguiendo tal tesitura, y ante tales modificaciones, corresponde tomar en consideración lo dispuesto en el art. 2 del Código Penal de la Nación, la doctrina resultante de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "VIDAL, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769" (Fallos 344:3156), "Cristalux S.A. s/ ley 24.144" (Fallos 329:1053), "Palero Jorge Carlos S/Recurso de Queja" (Fallos: 330:4544) (...)"*.

Sin embargo, respecto de la imputación por el delito de asociación ilícita tributaria, entendió que debe continuar la acción penal por



cuanto: "(...) El delito de asociación ilícita fiscal constituye una figura autónoma que protege el orden público y se consuma con la sola conformación de una organización estable con fines delictivos, de peligro abstracto (...) No requiere la efectiva consumación del delito-fin ni depende de su resultado. Por ello, aún cuando se considerara extinguida la acción penal respecto del delito tributario de evasión por aplicación del Principio de Ley Penal más Benigna, ello no impacta en la tipicidad ni en la punibilidad de la asociación ilícita fiscal. Es por ello que, es improcedente el arrastre extintivo que pretenden hacer valer las defensas, aceptar la postura defensiva implicaría convertir a la asociación ilícita en un delito accesorio, extender analógicamente una norma de carácter excepcional, desnaturalizar el bien jurídico protegido por el art. 15 inc. c ley 27.430."

Fijada la posición de la querella, se corrió traslado al Ministerio Público Fiscal quien coincidió en la postura asumida por el ARCA. Al momento de dictaminar, el acusador público sostuvo que: "(...) atento haberse producido la modificación en la condición objetiva de punibilidad mediante el dictado de la Ley 27.799, este Ministerio Público Fiscal no tiene oposición que plantear al requerimiento de extinción de la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

acción penal interpuesto por la defensa de los imputados, a los cuales se les había imputado el delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2014 y por la suma de \$ 1.979.321,15 (...) En este sentido, el monto presuntamente evadido por parte de los encausados correspondiente al período fiscal 2014, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio, no supera los nuevos umbrales legales, motivo por el cual la conducta atribuida ha dejado de ser perseguible por el Estado, en virtud del art. 2 del Código Penal, y de la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos "Vidal" "Tarifeño", Cristalux")".

Por otra parte, respecto al delito de asociación ilícita tributaria sostuvo que: "(...) aún cuando se considere extinguida la acción penal respecto del delito tributario de evasión por aplicación del Principio de Ley Penal más Benigna, dicha circunstancia no impacta en la tipicidad ni en la punibilidad de la asociación ilícita fiscal, resultando ser improcedente el arrastre extintivo que pretenden hacer valer la defensa, aceptar la postura defensista implicaría convertir a la asociación ilícita en un delito accesorio, extender analógicamente una norma de carácter



excepcional y desnaturalizar el bien jurídico protegido por el art. 15 inc. "c" ley 27.430 (...)".

Finalmente, solicitó que el Tribunal no haga lugar a la extinción de la acción penal en relación al delito de asociación ilícita fiscal.

Corrida vista a las defensas para asegurar el principio de contradicción, sólo respondió el Dr. Esteban Daniel Semachowicz en representación de Nancy Noemí Rivero, Ricardo Marcelo Teramo, Alan Teramo Rivero y Beatriz Viviana Rivero, mientras que los Dres. Matías Ledema y Sofia del Valle Tridico quienes representan a José Luis Gallinal, guardaron silencio.

En el planteo defensivo se mantuvo la postura de su escrito original que, tomando los argumentos de la Sala I de la CFCP en el fallo "Roses", sostiene que ante una eventual inexistencia de delitos tributarios imputables objetivamente, surge la imposibilidad de adecuación típica en la especie y por tanto la palmaria inexistencia del delito previsto en el art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario.

Fijado entonces el contradictorio, me encuentro en condiciones técnicas de resolver los planteos formulados.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

III.

En primer término, la cuestión traída a resolver en esta etapa del proceso esto es, antes del inicio del debate, resulta procedente, en tanto el pedido de sobreseimiento introducido por las defensas se sustenta en uno de los supuestos especiales previstos por el art. 361 del ritual a través de la aplicación de una ley penal más benigna.

En efecto, acerca de esta cuestión se expidió el tribunal del recurso en cuanto “[s]i bien resulta atendible considerar que la enunciación del art. 361 del CPPN no es meramente taxativa, lo cierto es que para recurrir a ese procedimiento se torna imprescindible que la situación jurídica aparezca como evidente -como ocurre en el presente caso- y que no resulte necesaria la concreción del debate o se modifiquen los propios presupuestos normativos de la imputación. En esto reside el núcleo de significación jurídica del mecanismo [...]” (Sala II de la CFCP 12.635 “Méndez, Nélida Argentina s/casación”, reg. 17.980 citado en el fallo de la Sala I CFP 11352/2014/T01/26/CFC10 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación”; CFP 3732/2016/T01/34/CFC19 Registro Nro. 1078/23).



Sentado cuanto precede, abordaré en primer término, el planteo de extinción de la acción penal respecto del hecho calificado como evasión tributaria simple -pago del Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 2014-.

Hay consenso en que la reforma legal tributaria modificó los umbrales de punibilidad de los delitos de evasión, como aplica en el caso de autos y no hay controversia en que la suma presuntamente evadida por el impuesto al valor agregado -IVA 2014-, que asciende la suma de \$ 1.979.321,15., no supera la suma de \$ 100.000.000 establecida hoy como condición objetividad de punibilidad conforme el nuevo régimen tributario.

El art. 18 de la Constitución Nacional establece que *"ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso"*, garantía que se integra con el art. 19 en cuanto ordena que *"ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe"*, postulado recogido por documentos internacionales con rango constitucional, incorporados en el art. 75.22 de la CN (art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15.1 parte 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esto es, en resumidas cuentas, que ningún ciudadano puede ser castigado y, no puede ser agravada la punibilidad de una conducta por una ley posterior al hecho.

El art. 2 del Código Penal establece que *"[s]i la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho"*.

En esa línea, nuestro Máximo Tribunal, en el fallo "Vidal" (Fallos 344:3156 de fecha 28/10/2021), recordó la obligación por parte de los tribunales de instancia inferior, de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones, al punto que a ninguna autoridad judicial le esté permitido desconocerlas (Fallos: 327:5106; 328:175 y 325:2723), en tanto con ello se contribuye a la tranquilidad pública y la paz social, en referencia justamente, al



desconocimiento en dicha causa de lo resuelto en el precedente "Palero" (Fallos: 330:4544) dictado el 23 de octubre de 2007.

Entre sus argumentos para rechazar la idea de la actualización monetaria como barrera a la aplicación del principio de la ley penal más benigna expuso que *"el aumento que introdujo la reforma sancionada por la ley 27.430, en los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, haya respondido a una actualización monetaria, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno"*. Así, la CSJN convalida y reafirma en tal precedente su propia jurisprudencia sostenida de manera uniforme e invariable durante décadas, incluso con anterioridad al dictado de la Ley 27.430 que resulta por demás de clara en su texto y coincidente en un todo, con lo que fuera la discusión parlamentaria previa a su sanción.

Todas las partes han considerado que la Ley 27.799 resulta la más benigna aplicable al caso.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

En definitiva, a la luz de las normas explicitadas y de la doctrina del más alto Tribunal expresada consistentemente a lo largo de los años (Cf. CSJN, "Cristalux S.A.", Fallos 329:1053; "Avila Zanini", A.1708.XLI; y los ya citados "Palero", Fallos 330:4544 y "Vidal" del 28/10/2021), tanto en el dictamen del Ministerio Público Fiscal como la querella contienen argumentos lógicos y que no se advierten notas de arbitrariedad, por cuanto esas posiciones desincriminantes impiden a la jurisdicción el impulso de la acción penal.

Por lo tanto, debe declararse extinta la acción penal por las conductas reprochadas a Nancy Noemí RIVERO, Ricardo Marcelo TERAMO, José Luis GALLINAL, Alan Marcelo TERAMO RIVERO y Viviana Beatriz RIVERO en orden al hecho calificado en la instancia de origen como evasión tributaria simple (IVA - periodo fiscal 2014).

IV.

Distinto habrá de ser el temperamento relacionado con el delito de asociación ilícita fiscal.

Que analizados los argumentos ensayados por las defensas en sustento a la atipicidad de la conducta constitutiva *prima facie* como delito de asociación ilícita tributaria, he de decir que, a



pesar de sus esfuerzos argumentales, no se verifican los presupuestos que habiliten su procedencia por lo que entiendo no pueden ser acogidos.

Para situarnos en contexto, habré de memorar que el juez del primer estrado elevó la causa a juicio -en lo que aquí interesa- imputando a: "(...) Nancy Noemí RIVERO, Ricardo Marcelo TERAMO, José Luis GALLINAL, Alan Marcelo TERAMO RIVERO y Viviana Beatriz RIVERO el haber formado parte -los tres primeros como jefes u organizadores y, los dos últimos, como miembros- desde el mes de abril de 2006 y hasta el mes de diciembre del año 2014 -al menos-, de una organización criminal destinada a cometer, colaborar o coadyuvar a cometer delitos tributarios y previsionales, interponiendo en dicho contexto, a los efectos de ocultar a sus verdaderos responsables, a diversas personas jurídicas y físicas en la realización de las actividades comerciales desarrolladas por los establecimientos que giraban bajo el nombre de fantasía "POSITIVO" y "RONNY STEAK HOUSE & BAR", de los cuales, Nancy RIVERO y Ricardo Marcelo TERAMO resultarían ser su máximos responsables y beneficiarios de las actividades allí desarrolladas, contando con la participación indispensable del contador José Luis GALLINAL como





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

organizador, y de la colaboración del hijo de la pareja, Alan Marcelo TERAMO RIVERO y de la hermana de Nancy Rivero, la Sra. Viviana Beatriz RIVERO, como miembros de la organización (...)".

En concreto, entendió que: "(...) la estructura montada por los acusados para cometer delitos tributarios, se utilizaron personas jurídicas interpuestas y personas físicas que, según el caso, prestaron sus nombres para constituir las, pero que no eran las verdaderas responsables y beneficiarias de las actividades. Así, a través del nombre de fantasía "POSITIVO", se han nucleado distintos establecimientos comerciales ubicados en Catamarca Nro. 1733, Güemes Nro. 3361, San Martín Nro. 2399, San Martín Nro. 2471 y Rivadavia Nro. 2420 todos de esta ciudad, cuya actividad rondaba en la "venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir NCP excepto uniformes y ropa de trabajo" y "ventas al por menor de prendas y accesorios de vestir N.C.P.". Así, mientras los establecimientos situados en la calle Catamarca Nro. 1733 y en Güemes Nro. 3361 eran explotados bajo la razón social "Objetivo S.R.L" (CUIT no 33707799949) -cuyos integrantes son Ricardo Marcelo TERAMO; Viviana Beatriz RIVERO; Alan Marcelo TERAMO RIVERO y Florencia Belén TERAMO RIVERO -actualmente fallecida-, los locales ubicados en San Martín n°



2399, San Martín Nro. 2471 y Rivadavia n° 2420 fueron explotados bajo distintas razones sociales que se han sucedido en el transcurso del tiempo y que tienen como punto en común su integración por personas interpuestas por los integrantes de la asociación criminal quienes, al momento de los hechos, resultaban insolventes, con domicilios de imposible localización y respecto de las que se constató la omisión de la declaración de ingresos con la coetánea realización de pagos por importes ínfimos, si se tiene en consideración el real volumen de actividad comercial desarrollada en dichos comercios (...).".

Si bien es cierto que no es esta la etapa procesal oportuna para efectuar un análisis acabado de las conductas que serán objeto de juzgamiento, propio de debate oral, corresponde examinar -con el grado de provisoriedad que la instancia admite- la concurrencia de elementos típicos del delito atribuido.

En función de eso, habré de señalar que el delito de asociación ilícita tributaria, a mi modo de ver, resulta autónomo y, por las características propias de su consumación, "no requiere el comienzo de ejecución de alguno de los restantes delitos previstos en la ley tributaria 24.769" (Catania, Alejandro Régimen Penal





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

Tributario, Estudio sobre la Ley 24.769, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 223).

Es que, en línea con la postura de los acusadores, la figura de asociación ilícita fiscal no puede ser alcanzada por los beneficios previstos en el régimen de regularización fiscal porque se trata de un delito de naturaleza compleja, sin contenido patrimonial determinado y que excede el marco de una mera evasión tributaria.

Sin desconocer la doctrina del tribunal de Casación sentada en el fallo "Roses" invocado por la defensa particular, considero que el supuesto analizado, conduce a una solución diferente.

A mi modo de ver, la consumación del delito de asociación ilícita tributaria se verifica con la existencia de una organización estable, con cierto grado de permanencia y con la finalidad de cometer delitos tributarios, todas cuestiones que, a priori, deben ser objeto de un debate oral a la luz de la descripción de la plataforma fáctica de la imputación antes plasmada que permite despejar sin hesitación el punto materia de controversia.

Es decir, la autonomía de la figura penal en cuestión no exige que los miembros sean



#39664397#497053343#20260506094444738

los contribuyentes directos del tributo evadido, ni que se haya consumado la defraudación final para acreditar el delito de asociación.

La pretensión de la acusación pública queda claramente expresada en su dictamen respecto del pedido de extinción de la acción penal por el delito de asociación ilícita fiscal: "*(...) aún cuando se considere extinguida la acción penal respecto del delito tributario de evasión por aplicación del Principio de Ley Penal más Benigna, dicha circunstancia no impacta en la tipicidad ni en la punibilidad de la asociación ilícita fiscal, resultando ser improcedente el arrastre extintivo que pretenden hacer valer la defensa, aceptar la postura defensista implicaría convertir a la asociación ilícita en un delito accesorio, extender analógicamente una norma de carácter excepcional y desnaturalizar el bien jurídico protegido por el art. 15 inc. "c" ley 27.430 (...)*".

En definitiva y para responder a la cuestión planteada, la atipicidad del hecho calificado prima facie como delito de evasión tributaria simple no proyecta sus efectos sobre el tipo penal de asociación ilícita tributaria, de lo que sigue, el rechazo del planteo extintivo introducidos por la defensa respecto del hecho





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

calificado *prima facie* como asociación ilícita tributaria.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

1. DECLARAR la falta de acción en relación al hecho por el que mediere acusación calificado en la instancia de origen como evasión tributaria simple -impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal año 2014- por no resultar una figura legal por aplicación de ley más benigna -Ley 27.799- (arts. 336 inciso 3 y 361 del CPPN) y, en consecuencia, **SOBRESEER** a Nancy Noemí RIVERO, Ricardo Marcelo TERAMO, José Luis GALLINAL, Alan Marcelo TERAMO RIVERO y Viviana Beatriz RIVERO, de las demás condiciones personales obrantes en autos.

2. NO HACER LUGAR a los planteos de atipicidad formulados por la defensa respecto del hecho constitutivo del delito de asociación ilícita tributaria previsto en el art. 15 inc. "c" texto según Ley 24.769 por los que mediere acusación respecto de Nancy Noemí RIVERO, Ricardo Marcelo TERAMO, José Luis GALLINAL, Alan Marcelo TERAMO RIVERO y Viviana Beatriz RIVERO, disponiendo que prosiga la causa según su estado.

Regístrese, notifíquese y ofíciase.-



NICOLÁS TOSELLI
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

CARLOS EZEQUIEL ONETO
SECRETARIO DE JUZGADO



#39664397#497053343#20260506094444738